

## Chile 1990-1999 ¿un proceso democrático inmóvil? (\*)

Hugo Zemelman



Nuestro punto de partida es que la situación que vive Chile desde 1990 a la fecha, y que un autor recientemente ha definido como la transición interminable, sea asumida como un espacio desde el que se puede avanzar en la construcción de una sociedad más justa en la que el individuo pueda llegar a realizarse. Así, este trabajo representa una reflexión teórica sin pretender incorporar referencias empíricas de situaciones coyunturales, pues busca responder preguntas que son pertinentes no solamente para Chile, sino para la mayor parte de los países latinoamericanos que han comenzado a mirar su futuro después del derrumbe de los gobiernos militares: preguntas relativas a la alternativa de desarrollo económico y social que puedan impulsarse desde la democracia reconquistada, más aún, que de su mismo desenvolvimiento resulte un fortalecimiento de la democracia.

En este sentido, llama la atención que muchos estudios sobre el momento actual de Chile, más allá de sus agudezas y acuerdos o desacuerdos, tienen la impronta de un cierto escepticismo o, en su defecto, de un ideologismo, disfrazados ambos de una forma de descripción a veces, incluso, densa. Sin embargo, no queda claro desde qué ángulo se organiza el pensamiento orientado en forma que en la realidad que emerge como el contenido de un esfuerzo interpretativo-explicativo es difícil, cuando no imposible, desencadenar sus potencialidades, esto es, no cabe en esas descripciones ningún margen para reconocer ámbitos de realidad en los que pueda distinguirse la presencia de diferentes tipos de actores capaces de construir nuevos sentidos de realidad.

Lo que decimos es la necesidad de abordar los problemas teórico-políticos que surgen en la actual coyuntura que lleva la impronta del capitalismo transnacional. Y ello supone incorporar en la misma construcción del discurso teórico a la dimensión utópica para no quedarse aprisionado en los parámetros de la situación de fuerza dominante. Es por eso que una teoría del Estado debe completarse con una teoría de la lucha política -tanto como una teorización sobre el modelo económico, o sobre el orden político- y acompañarse de una teorización de los actores. La historia es siempre un espacio con una zona de indeterminación. En este marco, muchos de los análisis sobre la situación política actual se caracterizan por una estructura altamente determinista, pero en los que esta zona de indeterminaciones no aparece reconocida, aunque represente el espacio de los verdaderos desafíos para enfrentar nuevas construcciones sociales.

Este tipo de análisis expresa una carencia de utopías que traduce un cierto derrotismo político, escepticismo intelectual o conformidad psicológica. Y quienes hacen excepción a este perfil levantan banderas ideológicas o puramente axiológicas sin mostrar las alternativas de construcciones viables, esto es, políticas. Pero, cuando se trata de mostrarlas, por lo general son discursos que quedan atrapados en los parámetros del orden hegemónico. Las únicas excepciones, no muchas, son

aquellos que tienen el coraje de reutilizar el utillaje gnoseológico proveniente de un marxismo actualizado, desprendido de todas las falsedades y vacíos de su tradición ortodoxa.

En efecto, nos enfrentamos a la tarea de construir la gran utopía que saque al país de su atrofia actual, oculta detrás de un discurso auto complaciente, y que responda a las tareas que plantea la transnacionalización, que reflejan al patrón de acumulación dominante, el cual consiste en "la nueva forma en que se organiza el capital en la esfera productiva", en que se "combina la centralización del poder sobre variadas actividades productivas por medio de conglomerados con una desconcentración simultánea de la actividad productiva misma, fragmentando los circuitos productivos y modificando notablemente los procesos de trabajo"<sup>2</sup> y cuya importancia consiste en que este proceso de centralización del capital en conglomerados con desconcentración productiva "se ha traducido finalmente en una aceleración de la acumulación de los grandes capitales con un estancamiento permanente de la rentabilidad del segmento de capitales pequeños y, principalmente, con severos efectos sobre el movimiento obrero" <sup>3</sup>.

Las consecuencias sociales de lo anterior son evidentes, pues, en el caso de Chile, "sólo un 5 % de la población, o en el mejor de los casos el 10 %, capta para sí la mayor parte de la riqueza"<sup>4</sup>, lo que ubica a éste entre los países con peor distribución del ingreso. Este hecho concuerda con los datos del Banco Mundial de que el 20 por ciento más rico de la población concentra el 61 por ciento del ingreso nacional. De manera más exacta, "el veintil más rico de hogares, con un 30 % del ingreso nacional, concentra 50 veces más que el veintil más pobre, que apenas llega a un 0.6 % del ingreso nacional" <sup>5</sup>.

En este contexto, la construcción de la utopía plantea que la descripción de hecho de las nuevas heterogeneidades, que alteran el cuadro social, económico y cultural, obliga a complementarse con otra lectura organizada desde opciones de construcción social. Ello implica entender los hechos como potencialidades conformadas por la globalización, en cuanto espacios de actores y de la consiguiente capacidad de éstos para vislumbrar e impulsar la construcción de proyectos diferentes de sociedad. Estamos en presencia de potencialidades que se contienen en la desarticulación de las estructuras productivas (alta rentabilidad del gran capital y baja rentabilidad del pequeño capital), así como en los procesos de nuevas estratificaciones a partir de un desplazamiento de la línea de la pobreza, en razón de la alta concentración de la riqueza; pero también de la propia transformación de la calidad de la pobreza que tiene lugar en el contexto de una sociedad, cuyo discurso hegemónico se caracteriza por su visibilidad de posibilidades de surgimiento económico, acomodada esta visibilidad en el desarrollo de una mentalidad orientada a concebir las lógicas productivistas como el mecanismo básico de la movilidad social y económica. En efecto, están las contradicciones, por una parte, que resultan del patrón de acumulación, como es la concentración del capital, la cual coexiste con el escenario de surgimiento de nuevas tecnologías que se identifican como una mejor vida para todos, y -de otra- una modificación de las identidades sociales de pertenencia que es producto de los cambios en las condiciones de vida, en cuyos marcos se contiene la tensión entre el volumen de ingresos posibles y los patrones de vida que se imponen socialmente como deseables.

En otras palabras, el pequeño y mediano capital es desplazado, o bien reconoce su territorio y organiza su propia estrategia de defensa ante la centralización del gran capital. En el primer caso, ¿el desplazamiento de estos sectores productivos qué consecuencia puede tener en la dinamización de otras actividades económicas?, ¿y qué implicación tiene este desplazamiento en la constitución de actores sociales y políticos? En el segundo caso, ¿qué consecuencias puede acarrear, en el bloque de la

propia burguesía, la emergencia de productores que se identifiquen con un proyecto nacional?, ¿y qué efectos puede tener lo anterior en la conformación de mayorías que puedan llegar a tener gravitación electoral?

En el examen de estas potencialidades, no se puede dejar de tomar en consideración un incremento de la heterogeneidad en la estratificación social, que transforma las bases de funcionamiento del sistema político en cuanto a la naturaleza de los actores sociales. Es claro que la heterogeneidad dificulta la generalización de intereses, lo que, a su vez, repercute en la posibilidad de generar acciones colectivas. "En esas condiciones resulta difícil la articulación social y política de distintos sectores en términos de la constitución de sujetos sociales y políticos que orienten la historicidad en determinado sentido" [.6](#)

Se planea la cuestión de reconceptualizar a los sujetos sociales, de manera de no abordar el análisis de la dinámica social y política desde los parámetros de determinados pre-conceptos acerca de lo que son los sujetos sociales. En este sentido, parece inadecuado partir de un concepto acabado acerca de lo que son los sujetos, pues se corre el riesgo de buscar el espacio social a una modalidad históricamente inexistente de éstos.

Más bien, se trata de entender la dinámica subyacente de subjetividades sociales que puedan explicar las modalidades emergentes de actores sociales. Por ejemplo, ¿cuál es la subjetividad que se contiene en grupos de productores que están enfrentando su desplazamiento hacia otros sectores productivos, en razón de su imposibilidad o creciente dificultad para resolver su reproducción económica y social?, ¿qué pasa con los agricultores que no pueden seguir siendo agricultores? O bien, en el otro extremo, ¿qué pasa con la tensión provocada por una gran visibilidad social y con el enraizamiento de una mentalidad productivista, asociada a cierta calidad de vida impuesta por la propaganda masiva, y el real acceso a los medios para satisfacer esas expectativas? O también ¿qué puede ocurrir en el plano de la subjetividad con un discurso económico, pragmático y reduccionista, cuando no llega a resolver los distintos ámbitos de las necesidades del hombre que no son estrictamente materiales?

La situación actual del llamado Estado democrático tiende a apoyarse en un sistema de clientelas que conforma una sociedad civil dependiente de un orden político adecuado para una determinada estrategia de crecimiento económico; es una sociedad civil débil porque expresa la aguda atomización social que impide el desarrollo de ciudadanos y que se corresponde con "un sistema político autista, desconectado de su medio ambiente societal". [7](#)

Ese proceso determina la autonomía sometida a una ostentosa deformación en "oligarquía política" que oculta sus tensiones, todavía no claramente manifiestas entre representados y representantes. Lo que decimos se muestra en la tendencia a los acuerdos "transversales" entre los distintos segmentos de la clase política, más allá de sus diferencias ideológicas que, supuestamente, legitiman su condición de mandatarios; de ahí que esta tensión puede constituir un foco latente de conflictos que lleguen a desencadenar procesos desconocidos.

También lo que decimos se puede estar traduciendo en una pérdida de representatividad de los partidos; en la falta de interés de la población por participar en las elecciones y, por último, en la tendencia a forjar el proyecto democrático con base en una lógica cupular con desvinculación de la base social. En este sentido, la alianza gobernante, la alianza de fuerzas democráticas, conforma un proyecto político a nivel de la clase política, en el espacio de la dirigencia partidista, sin haber podido sedimentarse como movimiento social. Por eso, puede representar una forma de control de la sociedad civil, de manera de garantizar que ésta respete los límites del orden político.

Las anteriores son algunas potencialidades que rescatamos como ópticas para

organizar la lectura de la coyuntura actual, la cual reconoce como una de sus expresiones el espacio de la sociedad civil, en tanto contenga una pluralidad de visiones. Esta pluralidad puede definir el campo en el que se contengan distintas modalidades de subjetividades sociales, dentro de las cuales cabría diferenciar las que llegan a conformar sujetos y las que no; y, entre las primeras, a los distintos tipos de sujetos en cuanto a la significación que pueden asumir si se les analiza desde la perspectiva de su capacidad de influencia en la sociedad nacional. Dicha pluralidad se traduce en la problemática del surgimiento o no de las capacidades sociales para profundizar en el desarrollo de la democracia, a través de impulsar la resistencia contra la desigualdad, o sea, capaces de promover que la democracia avance hacia la equidad social.

No obstante, la democracia no abre espacios a nuevos actores capaces de transformar las situaciones de desajuste económico, social y político en proyectos de carácter global, lo que no significa que las inequidades que se contienen y ocultan (v. gr.: desigual acceso a la calidad en educación y salud, estabilidad laboral, posibilidades de uso alternativo del tiempo libre, etcétera, sin olvidar las abruptas diferencias en la distribución del ingreso per cápita) no determinen el surgimiento de ciertas subjetividades sociales que, en algún momento, puedan dar lugar a la conformación de voluntades sociales. El diagnóstico actual de la democracia en Chile apunta a que la "democracia es débil", que "no existen los espacios de debate nacional sobre el futuro ni la conformación de actores sociales que los ocupen"; o bien que éstos "son extremadamente débiles". [8](#)

Esa debilidad es reforzada por el sistema electoral que facilita que con un tercio de la voluntad se pueda controlar la mayoría del Senado, además del elemento ideológico de pretender identificar cualquier debate en la democracia con posturas anti-democráticas, el cual, de alguna manera -más allá de la derecha que no ha roto "el cordón umbilical con el régimen militar pasado" [9](#)-, se ha transformado en la pauta de comportamiento fundada en un concepto de equilibrio social muy próximo al inmovilismo.

En efecto, en la tradición democrática, siempre ha existido la expresión de que el futuro de la sociedad puede concebirse en el marco de una pluralidad de utopías; en cambio, en la actual coyuntura esa pluralidad deviene en sinónimo de debilitamiento de la democracia. Se requiere del consenso, pero del consenso en torno de un proyecto de economía y sociedad, por cuanto cualquier oposición crítica, por constructiva que sea es considerada atentatoria de la misma democracia. Esta se construye "dentro del marco institucional prefijado por el autoritarismo, con una fuerte presencia in situ de actores del régimen militar" [10](#) Esto significa contenerla, subordinada o aplastada, por mecanismos político-electorales, o por medio de una manipulación ideológica orientada a exaltar el temor a la regresión autoritaria, o bien, conducente a persuadir a la opinión pública de que no hay alternativas al proyecto dominante.

Desde esta perspectiva, se plantea la relación entre actores sociales y políticos que puedan transformar ciertos valores en propuestas de sociedad; en tal situación la democracia puede asumir el carácter de un espacio amplio donde se pueda desplegar el juego entre distintos proyectos o utopías, o bien reducirse a constituir el espacio de un solo proyecto: el hegemónico. Por esta razón, se puede discutir la significación política de la re-organización del Estado y en particular el de la descentralización del poder, en cuanto transferencia de la capacidad de decisión sobre opciones de construcción socio política, yendo más allá de la cuestión de la eficiencia del aparato estatal, esto es, abriendo espacios aunque sea desde el poder local, que transgredan la alianza a nivel nacional de "cooperación de las élites políticas del antiguo régimen autoritario y del emergente régimen democrático" [.11](#) La descomposición de los antiguos actores sociales y la compleja recomposición

social que resulta de la desarticulación de la economía y de la sociedad, efecto de la transnacionalización, ha provocado una falencia de los actores políticos. Hay una crisis de proyectos de sociedad, más aún, se observa un renunciamiento a plasmarlos. Y cuando se pretende hacerlo se trata de forjarlos en términos de que los proyectos, en el plano de la representación política, conjuguen a todos los sectores de la sociedad, o sea, se pretende hablar de país y no de fuerzas sociales capaces de impulsar propuestas, óptica que diluye la capacidad política para leer otras posibilidades de desarrollo que no sean las que impone el discurso dominante, heredado del régimen militar.

Es así como en el caso de algunos actores políticos importantes en la historia de Chile, como es el Partido Socialista, se sostiene en su último documento programático, aprobado en el Congreso de Programa, celebrado en mayo de 1996, que "el proyecto socialista asume la lucha de los explotados, los oprimidos, los excluidos y los dominados. Pero, además, pretende representar al conjunto de la sociedad, ya que su propuesta es también liberadora de todos aquellos que fundan su vida en la acumulación de riquezas materiales y en la demanda incesante de bienes de consumo suntuario".

Desde esta visión, se puede plantear "desarrollar la función de regulación del mercado", pero sin cuestionar el patrón de acumulación, limitándose, en el mejor de los casos, a políticas focalizadas en atacar la pobreza. Sin embargo, ¿qué significa estimular el crecimiento económico con base en inversiones cada vez mayores, que conllevan un alto desarrollo tecnológico, generadoras de una alta concentración del ingreso, pero sin que se corresponda con la creación de nuevos empleos, y en ese contexto plantear la equidad social y la sustentabilidad ambiental?, ¿cuál es la racionalidad que se supone a esa inversión que permita concluir que sea promotora de equidad y equilibrio ecológico?, ¿en qué realidad imaginaria se puede estar pensando?

De otra parte, ¿cómo es posible y qué naturaleza revestiría promover el desarrollo de la sociedad civil en un contexto de marginación creciente, de pauperización aguda, de ignorancia ominosa?, ¿es que la equidad y la sustentabilidad ambiental se pueden reducir al ámbito de las políticas sociales que ofrece apoyar el Banco Mundial? Y en caso de ser así, ¿de dónde saldrán los recursos?, ¿están los sectores acomodados dispuestos a una modificación de la estructura tributaria para poder estar en condiciones de enfrentar y superar la injusticia y lograr el desarrollo ecológico? [12](#)

Una de las consecuencias del abandono de un proyecto de fuerza social se puede observar en la falta de preocupación acerca de cómo compatibilizar la globalización, reflejo de la transnacionalización del capital, con la defensa de la sociedad nacional. ¿Se renuncia a ésta en beneficio de aquella?, ¿la subordinación de la sociedad nacional a la globalización económica no se traduce acaso en la creación de condiciones que garanticen la preponderancia y privilegio de grupos sociales particulares al costo de marginar a las grandes mayorías?

Lo que decimos sobre la democracia en Chile supone como trasfondo la cuestión de la continuidad o discontinuidad entre el momento del régimen militar y la situación histórica que se inicia con los gobiernos civiles, a partir de marzo de 1990.

El proyecto central que impulsó el régimen militar de garantizar una sociedad ordenada para un despegue económico, de reforzar un gobierno estable y comprometido con los agentes principales de la producción, parece ser el mismo proyecto de la democracia, en la que se continúa buscando la consolidación de grandes conglomerados políticos comprometidos con el mismo proyecto económico, de manera de no arriesgar la línea estratégica a través de la alternancia en el ejercicio del poder.

Cabe preguntarse si el proceso de redemocratización es capaz de trascender los límites del orden político heredado o, en definitiva, quedarse atrapado por éste. ¿El proyecto económico social autoritario se contiene en la democracia revivida, o ésta lo altera? ¿Renace la democracia como espacio de múltiples proyectos, congruente con su condición de pluralidad, o más bien es solamente el vehículo civil para el mismo proyecto económico concentrador de la riqueza? Por lo mismo, ¿la civilidad de los gobiernos democráticos expresa la misma lógica de orden impuesta por el régimen autoritario, aunque con otro discurso ideológico?

Para responder a estas interrogantes es necesario rastrear la dinámica que subyace en la morfología sociopolítica de los gobiernos de Patricio Aylwin y Eduardo Frei, por lo menos en tres espacios en el que transcurre el actual proceso histórico: a) cuáles son los espacios que ofrece la democracia para desenvolver márgenes opcionales de construcción social; b) la democratización política se ha reducido -según parece- con los esfuerzos de modernización del aparato estatal, enfocada a abaratar sus costos y permitir menores impuestos directos, mientras que los demás aspectos de la democratización se restringen a cuestiones de procedimiento, y éstos a su vez a las exigencias de estabilidad y eficacia, y se deja de lado la participación social y económica que es donde, en verdad, se muestra concretamente la presencia de pluralidad de visiones con que se ha identificado clásicamente a la democracia, o más bien, la democracia aparece como un instrumento al servicio de la misma estrategia económica; y c) cuál es la dinámica real de la sociedad civil para influir en el rumbo del país y sus perspectivas más allá de coyunturas de corto tiempo. Las cuestiones anteriores se refieren a un conjunto de desafíos de teorización sobre el proceso político actual que, con modalidades particulares, se inició con el golpe de Estado de 1973. En ésta dirección, procede formular una serie de planeamientos conceptuales cuyo cometido sea contribuir a avanzar en la caracterización de una problemática que puede ser indicadora de todo un momento histórico, cuya prolongación en el tiempo es muy difícil de predecir, pero cuyo conocimiento en profundidad puede constituir un requisito necesario para descubrir las potencialidades de alternativas de desarrollo que se contienen en la actual coyuntura, según sea la visión de futuro que nos desafie para construir la historia, esto es, dar dirección a los procesos sociales.

La crisis de la democracia estuvo provocada por la contradicción entre proceso de acumulación y las necesidades de legitimación inherentes a la democracia representativa. Esta contradicción se hizo evidente en las políticas de los sesenta, que tuvo entre otras manifestaciones la crisis de representación política y la misma desarticulación del Estado que culminará con el conflicto de poderes. En el trasfondo de lo dicho, está el hecho de que el proceso de democratización en Chile ha respaldado y legitimado (hasta el golpe de Estado) la participación en igualdad de condiciones de todos los grupos sociales. Es así como en el plano ideológico la Revolución en Libertad de la Democracia Cristiana (1964-1970), su política de promoción social y el impulso a la reforma agraria, son expresiones anticipadas por sectores de la burguesía de una política de desarrollo que después fuera continuada en las políticas de cambios estructurales propuesta por el gobierno de la Unidad Popular.

Tales escenarios de cambio se llegan a transformar en las expectativas de muchos sectores sociales, pero también en el temor de una minoría poderosa: que la acumulación de riqueza se pueda llegar a socializar, poniendo en riesgo la estabilidad y reproducción del sistema capitalista. Esta situación de tensión desembocó en la cuestión de buscar una forma de organización del Estado que asegure el mantenimiento del sistema capitalista en su conjunto. [13](#)

En el contexto de estos procesos de cambios, la democracia no se mostró para los grupos económicamente privilegiados como un sistema político capaz de garantizar

la preservación del sistema económico capitalista. En este sentido, desde el golpe de Estado de Brasil, en marzo de 1964, las fuerzas armadas comienzan a ser reconocidas como el instrumento capaz de asumir las tareas de control de todas las funciones del Estado que, entre otras consecuencias, conlleva en su lógica de largo plazo un rompimiento de la división de poderes y de sus equilibrios respectivos. La irrupción de los militares generalizada en los setenta, detiene el proceso de democratización de los sesenta que llevó, o estuvo a punto de llevar, al Estado a transformarse en un espacio de coexistencia entre las clases, dejando de lado, o muy subsumido, su carácter estrictamente político clasista. De ahí que los golpes militares no hacen más que permitir que esta función perdida o diluida del Estado sea recuperada directamente, sin recurrir a mediaciones. Es el caso del golpe de Estado de 1973 en Chile.

Este proceso de militarización cumple la función de establecer una nueva relación entre sociedad civil y orden político, pero cuya viabilidad puede darse solamente desde un poder centralizado, libre de los obstáculos propios de la normatividad demócrata-parlamentaria. Se trata de ajustar a las necesidades y límites del orden político, las demandas, efervescencias y múltiples expresiones ideológicas y programáticas que surgían en la sociedad civil. Los parámetros de funcionamiento de ésta quedan subordinados a los parámetros del orden político-estatal. Este orden es el que aparentemente se hereda, no exclusivamente en el ámbito de las estructuras institucionales, sino principalmente en el plano de una ideología dominante, mutilante, triunfal, bloqueadora de visiones y despolitizadora de la conciencia.

Lo dicho se refiere a síntomas de contradicciones entre el sistema político y la organización económica que, encontrando su máxima expresión en los golpes militares, perdura hasta hoy. No puede dejar de reconocerse que la democracia recuperada, después de la caída de los regímenes autoritarios, no está libre de las contradicciones que originaron los golpes, aunque los mecanismos de tutelaje puedan ahora asumir otras formas de manifestarse que no sea la fuerza física. Como se ha señalado, "aunque el debate parte de la búsqueda de mantener la democracia, ésta se reduce a la cuestión de los procedimientos, y los procedimientos se validan de acuerdo con el logro de objetivos de estabilidad y eficacia" [.14](#)

El Estado democrático se encuentra en la necesidad de controlar la dinámica de la sociedad civil. La preservación del orden político define los límites que legitima el movimiento "aceptable" de la sociedad civil. Sin embargo, para que este nuevo orden, que surge de los golpes militares, sea viable, tiene que concebirse en forma negativa, o bien sin alternativas reales.

La primera situación se dio en la etapa de los golpes militares cuando su principal justificación, en el contexto de la guerra fría, fue impedir el advenimiento y consolidación del comunismo. La segunda modalidad es la propia del momento actual, caracterizada por la estrategia económica neoliberal: no hay otra estrategia posible, en el contexto de la globalización, que permita garantizar el crecimiento de los países latinoamericanos.

En efecto, si bien inicialmente el sentido de los golpes militares fue impedir un orden comunista, la razón superior de su legitimación fue alegar la carencia de alternativas y, así, surgió el estado autoritario militar como la forma de organización estatal necesaria para asegurar y reimpulsar un desarrollo capitalista debilitado durante la época de la democracia social y política, aquella que conformaba un espacio entre proyectos de diferentes actores sociales.

Esta subordinación de la sociedad civil al orden político, que caracteriza la forma estatista-autoritaria, es la que nos debe responder si efectivamente se ha heredado a los regímenes civiles, lo que se puede manifestar en situaciones tales como la alta concentración de facultades en la figura presidencial y en la tendencia a su

reelección indefinida. Es indudable que la conducta política de los grupos en el poder en el seno de la democracia está fuertemente determinada por el interés de crear las condiciones internas capaces de atraer al capital internacional y asegurar el ciclo de su reproducción y ampliación; de ahí que los requisitos de orden, control y eficacia se imponen a los espacios de pluralidad que se convierten en disfuncionales para la consecución de estos objetivos económicos. De esta manera, el modelo económico fija las características del sistema político y la democracia de espacios abiertos no es vista como la opción que mejor asegure el logro de esas metas.

Pareciera que estamos enfrentados al desarrollo y preservación de democracias controladas, jerárquicas, técnicas y eficientes, si atendemos a lo que pregona hoy día el discurso dominante de la clase política, liberal y tecnócrata. No podemos dejar de tener presente que el modelo de acumulación impuesto por la división internacional del trabajo, basado en el predominio de la fracción monopolista exportadora, aliada y subordinada del capital internacional, y en la represión a cualquier expresión del movimiento popular, hace imposible recrear las condiciones apropiadas para formas estatales en que sea posible compartir el poder entre diferentes grupos sociales. La argumentación tendiente a legitimar un orden político sobre la base de considerarlo frontera infranqueable para mantener la estrategia económica y sus formas de democracia ad hoc, estable, eficiente y no participativa, determina necesariamente el surgimiento de un tipo de ideología pragmática cuya piedra de toque es la pérdida de la conciencia política. Más aún, se impone la necesidad de una conciencia mínima, con lo que se crean las condiciones para la difusión y reproducción de ideologías conservadoras que tienden a permear a todos los grupos sociales.

¿La idea conservadora que justificó el golpe de 1973, permea o no el pensamiento político actual en el contexto de la democratización? Su reivindicación de una "figura fuerte en la conducción del Estado" y su crítica al "democratismo cristiano se ve complejizada con la postura del gremialismo que, sin abandonar la necesidad de un "Estado portaliano", devalúa la acción partidista, enfatizando "el papel de las asociaciones intermedias y (que) entrega al Estado una función puramente subsidiaria" .[15](#)

A partir de esta nueva vertiente, diferente a la tradición nacionalista y autoritaria - estatista-, el pensamiento autoritario se abre hacia elementos neoliberales en la versión de Hayek. El pensamiento conservador coincide con el neoliberalismo en su rechazo "al constructivismo, es decir, la ingerencia planificada del Estado en las actividades propias de la sociedad civil", en forma de "reconocer el orden espontáneo que surge de las interacciones de individuos en la actividad mercantil"[16](#) . Esta es una idea de mercado que, más allá de su función económica, impregna de modo muy amplio el pensamiento político en Chile y que conlleva el compromiso de identificar mercado con libertad de modo tal que la lucha por la libertad-mercado permitiría por sí misma avanzar en la prosecución de las otras grandes reivindicaciones que han movilizad o al hombre, como igualdad y justicia. Paradójicamente, lo que caracteriza al trasfondo del momento actual es un inmovilismo democrático por temor a perder la democracia. Se teme la crisis que puedan provocar los sectores conservadores y de la derecha económica, los cuales se han terminado por transformar en el parámetro desde el cual se tiene que definir cualquier estrategia de lucha por construir utopías alternativas, que puedan resolver, armónicamente, la relación entre crecimiento económico, justicia social y realización autónoma del individuo.

## Notas

1. Luis Maira. Chile, la transición interminable. Ed. Grijalbo. México D.F.. 1999.



2. Rafael Agacino. La anatomía de la globalización y la integración económica, meca. ,1997. p. 6.
3. Ibid., p. 7.
4. Hugo Fazio. "Chile entre los países de peor distribución del ingreso a nivel mundial", en Jorge Lavandero. El Dilema de Chile ¿Crecimiento sin Equidad? Alegría y Asociados Editores. Santiago, Chile. 1996. p. 55.
5. Jacobo Schatan. "El crecimiento económico, equidad y pobreza en Chile: una visión diferente", en J.Lavandero. op. cit.. p. 78.
6. Rodrigo Baño y Enzo Faletto. Institucionalidad política y proceso social: el debate sobre presidencialismo o parlamentarismo. Serie Cuadernos de Trabajo, Octubre. Departamento de Sociología, Facultad de Ciencias Sociales, Universidad de Chile. 1992. p. 73.
7. Robinson Pérez. "Contexto y racionalidades en la modernización del Estado", en Revista de la Academia, No. 1, Primavera. Universidad Academia Humanismo Cristiano. 1995. p. 65.
8. Manuel Antonio Garretón. Hacia una nueva era política. Estudio sobre las democratizaciones. FCE. Santiago, Chile. 1995. pp. 255 y 258.
9. Ib., p. 258.
10. Robinson Pérez, o. c. en nota 6, p. 58.
11. Id..
12. Frente a los estudios que demuestran la factibilidad de financiar el ataque a la pobreza con recursos provenientes de los sectores de altos ingresos (cfr: J. Schatan, o. c. en nota 4), por parte de la derecha se sostiene que la distribución del ingreso "no debería ser, en este momento, la preocupación fundamental de los chilenos", preocupación que recién debería expresarse, "cuando hayamos logrado el ingreso per cápita de 20,000 dólares anuales por habitante, cuando ya no tengamos pobreza" (Antonio Sancho, Director del Programa de Desarrollo Social del Instituto Libertad y Desarrollo, citado por Hugo Fazio, o. c. en nota 3, p. 55).
13. Es conocida la preocupación del imperialismo ante esta situación económica y política. Es así como se trató de interrumpirlo, en el tránsito del gobierno Demócrata Cristiano al gobierno de la Unidad Popular, recurriendo a presiones inauditas sobre la Democracia Cristiana para impedir que el sucesor de Frei fuera Allende. Según afirma documentadamente Joan Garcés, el gobierno de Estados Unidos "puso a disposición de doscientos cincuenta mil dólares para sobornar a parlamentarios del Partido Demócrata Cristiano para evitar que éstos votaran a favor del Dr. Allende en el Congreso Pleno". No obstante, la directiva de la Democracia Cristiana de la época no aceptó "los sobornos promovidos desde Washington". En efecto, "en el pleno de la Junta Nacional de ese partido, el 4 de octubre de 1970, la propuesta de elegir a Allende en el Congreso Pleno fue aprobada por 271 votos contra 191" (Joan Garcés. Soberanos e intervenidos. Chile, la guerra fría y después. Ediciones BAT. Santiago, Chile. 1995. pp. 68y 69 (nota al pie de página.).
14. R. Baño y E. Faletto. o. c. en nota 5, p. 22.
15. Renato Cristi y Carlos Ruiz: El pensamiento conservador en Chile. Ed. Universitaria, Santiago, Chile. 1992, pp. 124 y 126.
16. Ib., p. 127.

(\*) Publicado en la Revista MEMORIA, Nro 132. México.



Información disponible en el sitio ARCHIVO CHILE, Web del Centro Estudios “Miguel Enríquez”, CEME:

<http://www.archivochile.com>

Si tienes documentación o información relacionada con este tema u otros del sitio, agradecemos la envíes para publicarla. (Documentos, testimonios, discursos, declaraciones, tesis, relatos caídos, información prensa, actividades de organizaciones sociales, fotos, afiches, grabaciones, etc.)

Envía a: [archivochileceme@yahoo.com](mailto:archivochileceme@yahoo.com)

**NOTA:** El portal del CEME es un archivo histórico, social y político básicamente de Chile. No persigue ningún fin de lucro. La versión electrónica de documentos se provee únicamente con fines de información y preferentemente educativo culturales. Cualquier reproducción destinada a otros fines deberá obtener los permisos que correspondan, porque los documentos incluidos en el portal son de propiedad intelectual de sus autores o editores. Los contenidos de cada fuente, son de responsabilidad de sus respectivos autores, a quienes agradecemos poder publicar su trabajo.

© CEME web productions 2003 -2007 